

# CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

## *CONTROVERSIAL ISSUES IN APPLICATION OF AN INTEGRAL LAW AGAINST GENDER VIOLENCE*

SILVIA PASCUAL LOPEZ

*Universidad de Deusto-Bilbao*

**Resumen:** Dos de las principales cuestiones que se plantean controvertidas en la aplicación de la ley integral contra violencia de género la constituyen la dispensa y el quebrantamiento de la medida cautelar o condena con el consentimiento de la víctima. En el primer supuesto, la dispensa, varias son las cuestiones que deben ser analizadas: su fundamento, dispensa por parentesco, extensión a la pareja estable y si es exigible la convivencia en la misma. En el segundo supuesto, quebrantamiento de la medida cautelar o condena con el consentimiento de la víctima, el debate se centra en el juzgado competente, así como en las medidas a adoptar.

**Palabras clave:** víctima, violencia, género, dispensa, quebrantamiento.

**Abstract:** *Two of the main issues that are considered controversial in the application of the integral law against gender violence constitute the dispensation exemption and the breach of the precautionary measure or sentence with the consent of the victim. In the first case, the dispensation, several are the issues that should be analyzed: its foundation, dispenses for relationship, extension to the stable partner and if coexistence is necessary in the same. In the second case, breach of the precautionary measure or sentence with the consent of the victim, the debate is centered in the competent court, as well as in the measures to be adopted.*

**Key words:** *Victim, Violence, Gender, Dispensation, Breach.*

**SUMARIO:** 1. LA DISPENSA: Casos en los que cabe la dispensa por parentesco. Fundamento de la dispensa. Extensión a la pareja estable. ¿Es exigible la convivencia para acogerse a la dispensa? 2. QUEBRANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR O CONDENA CON EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA: Juzgado competente. Medidas a adoptar.

### **1. LA DISPENSA: CASOS EN LOS QUE CABE LA DISPENSA POR PARENTESCO. FUNDAMENTO DE LA DISPENSA. EXTENSIÓN A LA PAREJA ESTABLE. ¿ES EXIGIBLE LA CONVIVENCIA PARA ACOGERSE A LA DISPENSA?**

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, *tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de*

*poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de efectividad, aun sin convivencia (artículo 1).*

El objeto de esta norma es dar respuesta a la violencia que ejercen determinados hombres respecto a las mujeres, en la relación sentimental de la pareja o ex pareja. Así el plus de protección a favor de la mujer que se introduce en la Ley Orgánica 1/2004, no se basa sólo en el hecho de ser el sujeto pasivo la mujer, sino por el hecho de que los atentados que sufre tienen lugar en el ámbito de esta relación. Interesante destacar que entre las competencias que asume los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer se haya incluido la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos cometidos sobre los hijos/as de la víctima, en cuanto los mismos guardan conexión con la situación de la madre. En muchas ocasiones los hijos se usan como instrumento de violencia contra la mujer, sin perjuicio del maltrato psicológico que, en todo caso, sufren, por ser testigos directos de actos violentos en el seno familiar.

La violencia de género a la que se refiere esta Ley comprende todo *acto* de violencia física y psicológica, incluso las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad.

Resulta de interés en este ámbito la declaración de la presunta víctima, dada cuenta que un alto porcentaje de los casos se producen en el más estricto ámbito de la intimidad de manera que, con frecuencia, va a existir un déficit probatorio, más allá de las versiones sustentadas por denunciante y denunciado.

Por otra parte, en la práctica diaria de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer es muy frecuente que la mujer no comparezca a ratificar su denuncia o a prestar declaración como perjudicada. Además, un elevado número de mujeres a los pocos días de haber denunciado retira la denuncia o se acogen a su derecho a no declarar en contra de su marido o compañero.

No resulta fácil ofrecer una explicación de este fenómeno, posiblemente muy superior en el supuesto de la violencia de género por encima del resto de los delitos. Los sentimientos afectivos en muchas ocasiones coexisten con la violencia aunque generalmente es un tipo de afectividad adictiva, dependiente, posesiva y basada en la inseguridad.

Es necesario analizar con detenimiento los presupuestos para que dicha declaración pueda fundar una Sentencia condenatoria, así como toda la problemática derivada de la retirada de la denuncia y de la exención de la obligación de declarar en contra de su pareja que establece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo 416.1 señala que:

*Están dispensados de la obligación de declarar: los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, su cónyuge, sus hermanos, consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se refiere el número 3 del artículo 261.*

*El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene la obligación de declarar contra el procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, consignándose la contestación que diere a esta advertencia.*

El problema en la interpretación de este precepto no está sólo en el alcance procesal de la dispensa, que es al que hacen referencia fundamentalmente las Sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial, sino también en el alcance subjetivo de la exención. Es decir, si ésta se aplica o no, además de los cónyuges, a las parejas unidas o que estuvieren unidas por análoga relación de afectividad a la del matrimonio, aún sin convivencia.

En este sentido podemos encontrar varias posturas:

1. Sentencias que reconocen la extensión restrictiva, exigiendo convivencia en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2003).
2. Sentencias que entienden que estas parejas no pueden tener un trato discriminatorio respecto de los matrimonios, teniendo en cuenta la realidad social (artículo 3 del Código Civil y artículo 14 de la Constitución). Este criterio es el actualmente más extendido en la práctica judicial (Sentencia del Tribunal Supremo 134/2007 de 22 de febrero).

En esta sentencia 134/2007 los hechos se refieren a diversas agresiones y violencias efectuadas por el condenado sobre la persona con la que convivía desde diciembre 2004. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 19 de marzo de 2005, 13 de abril de 2005 y durante todo el tiempo en que estuvieron conviviendo.

Si bien no consta en el *factum*, en la argumentación de la sentencia, fundamento jurídico primero, se afirma que la relación de convivencia continúa, considerándose la víctima como pareja de hecho aunque físicamente esta convivencia no se pudiera materializar por la situación de prisión, por esta causa, en la que se encontraba el recurrente desde el pasado 26 de abril de 2005. A pesar de ello, en el último trimestre del 2005 mantuvo *vis a vis* con el recurrente. A mayor abundamiento, en su declaración en el Plenario, que tuvo lugar el 20 de abril de 2006, se acogió al derecho de no declarar de conformidad con el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello fue admitido por el Tribunal sentenciador en una interpretación que asimilaba la relación de convivencia declarada por la víctima con el recurrente a la relación conyugal, que se cita en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la consecuencia de aceptarle la DISPENSA de declarar en el Plenario.

Esta cuestión y decisión del Tribunal, que fue cuestionada y protestada por el Ministerio Fiscal, no fue motivo de recurso. El Tribunal equiparó la relación conyugal a la de convivencia de hecho declarada y proclamada por la víctima en el plenario, a pesar de que por la situación de prisión no pudiera ser completa.

La excepción o DISPENSA de declarar al pariente del procesado o al cónyuge que establece este artículo 416, tiene por finalidad resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. Esta colisión se resuelve con la DISPEN-

SA de declarar, que es igualmente válida para el testigo en quien concurre la condición de víctima del delito del que se imputa al inculpado.

Puede ser una situación infrecuente pero no insólita. La víctima puede sobre valorar el vínculo de afecto y parentesco que le une al victimario, que el legítimo derecho a declarar contra él. Es una colisión que debe resolverse reconociendo el derecho a la víctima de decidir libremente, en su ejercicio de su autodeterminación en uno u otro sentido.

En el presente caso, el tribunal permitió a la víctima no declarar una vez verificado por el mismo que la convivencia continuaba.

La equiparación de la pareja de hecho al matrimonio es consecuencia de encontrarse en la misma situación *more uxorio* y que en definitiva el ordenamiento jurídico viene equiparando ambas situaciones a todos los efectos. Por lo que se refiere al sistema de justicia penal, basta la lectura de la *circunstancia mixta de parentesco* del artículo 23 del Código penal que se refiere junto a la relación conyugal a la de que la persona *esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad*.

Este es precisamente el criterio tenido en cuenta en los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y en la reforma de la Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 4 de Noviembre de 2009 y en vigor desde el día 5 de Noviembre de 2009, donde el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal queda redactado como sigue:

Están dispensados de la obligación de declarar:

1. *Los parientes del procesado en líneas directas ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 de artículo 261.*

*El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.*

2. *El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor.*

*Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.*

A modo de conclusión con relación a las anteriores pinceladas manifestar que la Ley ya proporciona una solución normativa al equiparar cónyuge con persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, pero sigue dejando una puerta abierta a la convivencia. Para el estudio de la misma es necesario remitirse a la Sentencia del Tribunal Supremo 134/2007 de 22 de febrero constituyendo el fondo

de la sentencia, y consiguiente conclusión a la que llega la misma, la necesidad de convivencia de la pareja de hecho para aplicación de la dispensa en el mentado caso.

El criterio de la necesidad de convivencia al cónyuge o pareja de hecho para la aplicación de la figura de la dispensa, puede encontrar un sustento más, amén de la jurisprudencia reseñada, en el hecho fácilmente deducible, que toda convivencia conlleva un vínculo de afectividad y relación, si se quiere, más estrecho, vínculo éste que plantea a la víctima mayor disyuntiva de cómo actuar (declarar o no declarar).

## **2. QUEBRANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR O CONDENA CON EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA: JUZGADO COMPETENTE. MEDIDAS A ADOPTAR**

El importante incremento de las agresiones hacia las mujeres en el ámbito doméstico y familiar ha implicado la necesidad de buscar una respuesta lo más rápida y eficaz posible tendente a poner fin a este problema o, por lo menos, a lograr una disminución de este tipo de comportamientos que han generado y siguen generando una notable alarma pública y social.

Es indudable que la mejor manera de hacer frente a dicha problemática implica un compromiso profundo de la sociedad, globalmente considerada, siendo los instrumentos necesarios múltiples: asistencia social, psicológica, psiquiátrica, laboral, etc.

La dimensión criminal o *Violencia de Género* representa una de las respuestas más importantes y demandadas por el colectivo social. Propiamente es la que emana de los Juzgados y Tribunales, es decir, la denominada respuesta penal y es precisamente en este ámbito donde ha surgido como remedio e instrumento supuestamente eficaz la *orden de protección*.

La introducción de este mecanismo jurídico-penal, de naturaleza básicamente preventiva, está produciendo conflictos en su aplicación que fundamentalmente se plasman en la enorme dificultad que supone la determinación del riesgo objetivo para la víctima.

Uno de los problemas que suscita dicho instrumento jurídico desde la doble vertiente: cuestiones procesales más controvertidas que conlleva y la eficacia que en su caso se está consiguiendo con su implantación, se genera con el quebrantamiento.

Las medidas de alejamiento establecidas implican una gran cantidad de denuncias ante el Juzgado por la comisión de presuntos quebrantamientos. Ello conlleva la incoación de nuevas causas judiciales cuyo fundamento primero se centra en la *antigua* denuncia por los *malos tratos*.

No podemos olvidar que un alto porcentaje de las causas tramitadas en relación con esta materia tiene su origen en comunidades o colectivos con ingresos económicos bajos y donde esos ingresos, con frecuencia, proceden del presunto agresor.

El círculo vicioso denuncia-alejamiento-quebrantamiento-retirada de denuncia-causa penal no es infrecuente y adquiere mayor envergadura en el caso de estos colectivos cuyo *itere* generador de procedimientos penales es el siguiente:

Agresor que bebe el fin de semana.

Como consecuencia de ello la frustración personal se acerba.

A raíz de ello agrede a su mujer o compañera, que puede presentar o no lesiones.

La víctima denuncia los hechos.

Se incoa la causa penal y en su caso se tramita la correspondiente protección.

Se acuerda la medida de alejamiento.

Quizás se llega a celebrar juicio rápido con conformidad.

Al día siguiente la denunciante rectifica o matiza sus primeras declaraciones manifestando que las mismas las hizo en un momento de acaloramiento y que su marido o pareja no es un mal tratador.

Consecuentemente la causa penal queda nuevamente vacía de contenido.

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de Protección Integral contra la violencia de Género en su artículo 40 impone como obligatorio:

*1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.*

*2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2.*

Con el texto anterior a la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, operada por la Ley 15/2003, el quebrantamiento de condena, medida de seguridad, medida cautelar, conducción o custodia cuando se encontrare en prisión el autor del quebrantamiento, la pena a imponer es la de seis meses a un año. Sin embargo, si el autor no estuviera privado de libertad, la pena a imponer es la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el quebrantamiento fuera de cualquiera de las prohibiciones impuestas como pena accesoria, es decir como pena de alejamiento, respecto de los delitos cometidos contra cualquiera de los sujetos pasivos del artículo 173.2 del Código Penal. Por lo tanto, con la redacción de la Ley 15/2003 en los casos de quebrantamiento de las medidas de prohibición: de residir en determinados lugares o acudir a ellos, de aproximarse o de comunicarse a la víctima o familiares, se podía imponer la pena privativa de libertad aunque estuviere en libertad el autor de los hechos si se tratare de un caso de violencia doméstica, pero solo si se trataba de un quebrantamiento de una pena accesoria, no si se quebrantaba la medida de alejamiento como medida cautelar. Así, el incumplimiento de una medida cautelar de alejamiento se venía sancionando con una pena de multa.

Sin embargo, si esas medidas de prohibición se adoptaran en otros casos distintos a los referidos a cualquiera de las personas comprendidas en el artículo 173.2 del Código Penal la pena a imponer sería la de multa de 12 a 24 meses, ya que el apartado 2 del artículo 57 al que se refiere el apartado 2 del artículo 468 del Código Penal,

se circunscribe a los hechos referidos a la comisión de cualquiera de los tipos penales del artículo 57.1 del código penal cuando la víctima fuera una de las personas comprendidas en el artículo 173.2 del Código Penal.

Esta referencia es importante y supone un tratamiento protector privilegiado en los supuestos de violencia doméstica frente al resto de supuestos delictivos contemplados en el artículo 57.1 del Código Penal, es decir, los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad o indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio, el honor, el patrimonio, y el orden socioeconómico. En estos casos, si se incumplen las prohibiciones contempladas en el artículo 48 de código Penal impuestas en sentencia como pena, entra las que se encuentra la medida de alejamiento, la pena a imponer no será la de multa de 12 a 24 meses, sino la de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 90 a 180 días para los casos de violencia doméstica.

La redacción del apartado 2 del artículo 468 del Código Penal que se incluye en La Ley 1/2004, señala que el incumplimiento de una medida cautelar o medida de seguridad incluida en las prohibiciones del artículo 48 del Código Penal llevará consigo la pena de seis meses a un año de prisión, siempre que se refiera a una de las personas incluidas en el ámbito del artículo 173.2 del Código Penal, es decir, en todos los casos de violencia doméstica. La reforma de este precepto es positiva, al establecer que el incumplimiento de la medida cautelar de alejamiento esté sancionada, al igual que el quebrantamiento de la pena de alejamiento, con pena privativa de libertad de seis meses a un año, lo que supone una pena mucho más proporcionada a la entidad y gravedad del hecho, teniendo en cuenta el daño psicológico y moral que comporta este tipo de comportamiento en las mujeres víctimas del maltrato. Con ello se acaban los problemas derivados de la anterior redacción que no permitía aplicar la pena privativa de libertad por incumplimiento de la medida cautelar de alejamiento adoptada por la vía del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una vez producido el quebrantamiento ¿Quién es el Órgano Judicial competente para el conocimiento de dicho quebrantamiento?

Es necesario distinguir dos supuestos:

Si el quebrantamiento va unido a un acto de violencia y/o intimidación el Juzgado competente es el juzgado de Violencia Sobre la Mujer.

Si sólo hay quebrantamiento sin violencia y/o intimidación la competencia corresponde a los Juzgados de Instrucción.

En el supuesto de que el imputado por el quebrantamiento venga detenido y puesto a disposición judicial (Juzgado de Guardia o de Violencia Sobre la Mujer), salvo que el Juez Instructor decreta la libertad provisional sin fianza, convocará a las partes a la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decreta la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza.

En los supuestos del procedimiento regulado en el título III del libro IV de esta ley se sustanciarán con arreglo a lo previsto en el artículo 798, salvo que la audiencia se hubiere celebrado con anterioridad.



La audiencia señalada anteriormente deberá celebrarse en el plazo más breve posible y dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial. A la misma se citará al imputado que deberá estar asistido de letrado, designado por él o de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas.

Dicha audiencia habrá de celebrarse también de celebrarse para solicitar y, en su caso, decretar la prisión provisional del imputado no detenido o su libertad provisional con fianza.

Si en la Audiencia el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitaren que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza, podrán realizar alegaciones y proponer medios de prueba quienes concurrieren. Todas ellas se deberán realizar en el acto o dentro de las setenta y dos horas antes indicadas.

El Juzgado o Tribunal es el competente para resolver sobre la procedencia o no de la prisión o la imposición de fianza. Si ninguna de las partes la solicita se acordará la inmediata puesta en libertad del imputado que estuviere detenido.

En el supuesto que la audiencia no pudiera celebrarse, el Juez o Tribunal competente podrá acordar la prisión provisional, siempre y cuando concurran los presupuestos del artículo 503 o la libertad provisional con fianza. Sin embargo, es necesario celebrar otra audiencia por el Juez o Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes, adoptando las medidas a que hubiere lugar por falta de celebración de la primera audiencia.

Cuando el detenido fuere puesto a disposición de un Juzgado o Tribunal diferente del que conociere la causa y el mismo no pudiese ser puesto a disposición del mismo en el plazo de setenta y dos horas, procederá el primero de acuerdo con lo señalado anteriormente. Todo ello sin perjuicio que una vez que el Juez o Tribunal de la causa reciba las diligencias, oirá al imputado, asistido de abogado, tan pronto como sea posible y dictará la resolución que proceda.

Si el imputado no está detenido por quebrantamiento, tratándose de quebrantamiento de *medidas cautelares*, el Juez de Violencia que conozca de la causa en la que se hayan dictado dichas medidas cautelares convocará al Fiscal y a las partes a la comparecencia del artículo 505 para la adopción de la prisión provisional o de otras medidas cautelares que impliquen una mayor limitación de la libertad personal del imputado, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.

El anuncio de esta convocatoria se reseña en la parte dispositiva del auto donde se dicta la orden de protección, que prevé el requerimiento al imputado, al tiempo de notificar las medidas cautelares u orden de protección, que se abstenga de realizar cualquier acto que suponga infracción de las prohibiciones impuestas apercibiéndole que en caso de incumplimiento se convocará la mentada comparecencia.

Objeto de esa comparecencia es tratar de ver si con las medidas cautelares vigentes la víctima está suficientemente protegida. De entender que no es así se trata de adoptar otras medidas que garanticen su protección, siempre guardando dichas



medidas de proporcionalidad a cada caso y ponderando en cualquier caso la situación personal y laboral del imputado.

Ejemplos de agravación consistirían en la ampliación de distancia relativa a la prohibición del imputado de acercarse a la víctima que venía impuesta en la resolución anterior, prohibición de acudir o entrar en la localidad o incluso en la provincia o comunidad de la víctima, colocación de dispositivos electrónicos (equipos de detección de proximidad en denunciante y denunciado), protección policial integral (servicio de escolta) o prisión provisional del imputado con o sin fianza.

Esta última medida mencionada, obviamente es la más gravosa para el derecho de la libertad del imputado, y únicamente se puede decretar cuando objetivamente resulte necesaria, no existan otras medidas menos gravosas, o existiendo, éstas han resultado o resultan ineficaces para alcanzar el fin que se persigue con la prisión provisional del imputado en los casos de delito de violencia de género, esto es, evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (artículo 503.1.3 letra c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Recordar el carácter excepcional de la prisión provisional según reiterada jurisprudencia.

El Juez de Violencia que lleve la causa y celebre esa comparecencia tiene que tener conocimiento de dicho quebrantamiento. El mismo puede venir directamente de las víctimas, comunicación de la policía directa a la causa o testimonios del Juzgado de Instrucción que lleve la causa del quebrantamiento.

Volviendo a la medida de agravación consistente en la colocación de dispositivos electrónicos, sin perjuicio que se adopte inicialmente en la orden de protección, se sustenta en el artículo 64. 3 párrafo 2 de la Ley Orgánica 1/2004 donde faculta al Juez a acordar la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato el incumplimiento de las medidas. Con esta medida se pretende garantizar la efectividad de las medidas cautelares de alejamiento y comunicación. A efectos de colocación se libra el oficio pertinente a la policía y al centro de control sito en Madrid a fin de que se disponga a mayor urgencia lo necesario para la implantación del sistema acordado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de fecha 8 de julio de 2009 entre el Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Igualdad, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado para la implantación del protocolo de actuación, para el seguimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género.

En el supuesto de que el imputado esté o no detenido por el quebrantamiento, *tratándose de quebrantamiento de condena*, debe a los efectos oportunos, sin perjuicio de la resolución definitiva firme que ponga fin a la causa, de remitirse testimonio de oficio o a instancia del Fiscal de la causa seguida por el presunto quebrantamiento (con violencia y/o intimidación o sin ella) al Juzgado de lo Penal en función de ejecutoria.

Qué decir que en la práctica se aprecia que algunos de los quebrantamientos se producen con el consentimiento de la víctima. Dicho consentimiento se tiene en cuenta como un elemento a efecto de calificación de los hechos, debiendo de valorarse si ese consentimiento es libre, voluntario o de contrario coaccionado.

Es precisamente por este hecho por el que se debería de requerir a la víctima para que ella también cumpla la orden de protección en los mismos términos que el imputado y bajo los mismos apercibimientos.

Difícilmente se puede proteger a la víctima si ella misma no respeta las prohibiciones impuestas al imputado.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- AA.VV., La Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. Cuadernos Penales de José María Lidón 2, Universidad de Deusto, Bilbao, 2005.
- AA.VV., Algunas Cuestiones Prácticas y Teóricas de la Ley Orgánica 1/2004. Cuadernos de Derecho Judicial IX-2007, Consejo General del poder Judicial. Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2008.
- AA.VV., Aspectos Procesales y Sustantivos de la Ley Orgánica 1/2004. Cuadernos de Derecho Judicial I-2007, Consejo General del poder Judicial. Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2007.
- AA.VV., Guía Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
- AA.VV., Respuesta Penal a la Violencia Familiar, Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1999.
- CORSI, J., Violencia familiar: una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Ed. Paidós, México, 1995.
- DELGADO MARTÍN, JOAQUÍN, La violencia doméstica. Tratamiento jurídico: problemas penales y procesales: la jurisdicción civil. Ed. Còlex, 2001.
- DE VEGA RUIZ, J. A.: Las agresiones familiares en la violencia doméstica, Editorial Arazandi, S. A., España, 1999.